

C.A. de Temuco

Temuco, catorce de junio de dos mil veintitrés.

Vistos:

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO DON LEOPOLDO CARRASCO JASHES, EN REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE “AGRÍCOLA Y GANADERA NORITA LIMITADA.

PRIMERO: Que, la recurrente, interpuso recurso de casación en la forma, en contra de la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2022 del el Tercer Juzgado Civil de Temuco basada en que el fallo recurrido adolecería del vicio contemplado en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, dado que la sentencia definitiva recurrida ha sido pronunciada con omisión del requisito establecido en el numeral cuarto del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Que, se sostiene que la sentencia recurrida no cumple con el numeral 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, ya que según se sostiene no contiene “las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia” y no se razona en relación a todas las argumentaciones expresadas por su parte al contestar el traslado de las excepciones en las cuales se hacían presente una serie de consideraciones de hecho y derecho que debieron “necesariamente” haber sido recogidos en el fallo, para cumplir con la exigencia antes indicada, así como tampoco analiza ni señala someramente cuales serían los requisitos del acto omitido y/o viciados que llevan a acoger la nulidad de la obligación demandada. Agrega, que no se comprende la forma cómo a través de lo expuesto en la parte considerativa, en cuanto reconoce que la factura N° 11 fue aceptada expresamente por la demandada, y omitiéndose absolutamente cualquier referencia al art. 3 de la Ley 19.983, alterándose sin motivo o justificación las normas reguladoras de la prueba, sin expresión de motivo o causal alguna, y olvidándose por



completo de la existencia de una presunción de derecho no analizada, luego resuelve acogiendo la excepción de nulidad de la obligación contenida en el artículo 464 N° 14 del Código de Procedimiento Civil, existiendo una incoherencia evidente en dicha forma de resolver. En efecto, agrega, la excepción indicada puede referirse a la nulidad absoluta o relativa conforme a los artículos 1681 y ss. del Código Civil, sin embargo, no existe referencia a ninguna de ellas, no se contiene una mención a cuál requisito faltaría o se estimaría viciado, lo que quiebra toda coherencia exigida en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: En seguida, el recurso señala como los vicios influyen en lo dispositivo del fallo, y le producen un perjuicio reparable sólo con su invalidación.

CUARTO: Que el vicio formal alegado por la parte recurrente a que alude el artículo 768 número 5, en relación con el artículo 170 números 4 del Código de Procedimiento Civil, concurre cuando la sentencia no contiene las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la decisión, porque, no se desarrollan los razonamientos que determinan el fallo y cuando carece de las normas legales o de equidad que tiendan a obtener la legalidad del mismo; pero no cuando éstos no se ajustan a la tesis sustentada por la parte que reclama, ni aun cuando ellas resulten equivocadas. En efecto, el cuestionamiento de los razonamientos, los supuestos fundamentos errados o deficientes, como la aparente carencia de lógica o de legalidad de los razonamientos de un fallo no son materia susceptible de enmendarse por la vía de la casación en la forma y no configuran, por ende, la causal en estudio.

QUINTO: Que, contrariamente a lo señalado por la recurrente la sentencia da cuenta entre los considerandos duodécimo a decimo sexto de las consideraciones de hecho y derecho en las cuales sustenta el acogimiento de la excepción del artículo 464 N° 14 del Código de Procedimiento Civil opuesta por la ejecutada



SEXTO: Adicionalmente, cabe consignar, que en el recurso de casación en el numeral tercero se indica que: “Así, la carga procesal prescrita en el artículo 170 N° 5 no ha sido satisfecha en forma legal, desde que rompe con el principio de unidad del proceso, olvidándose de todas las gestiones realizadas para notificar por avisos al demandado principal”.

SEPTIMO: Que, dicho párrafo no dice relación con el recurso de autos e incluso invoca un numeral diverso del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil al que da sustento a la casación, error que vicia un recurso de derecho estricto como el de autos, en que se debe ser claro, preciso y sin errores de redacción

OCTAVO: Que, de lo razonado resulta incuestionable que el fallo impugnado no ha incurrido en el defecto formal que se le imputó, por lo que la jueza de primera instancia, al no incumplir el requisito que se echa de menos, ha resuelto lo que les ha correspondido en derecho, en mérito de la competencia que los agraviados le entregaron y en el pleno goce de sus facultades jurisdiccionales y, por consecuencia, no ha podido producirse en el presente caso, el vicio del que se preocupa el N°5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación al N°4 del artículo 170, por lo que este arbitrio deberá ser rechazado.

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO DON LEOPOLDO CARRASCO JASHES, EN REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE “AGRÍCOLA Y GANADERA NORITA LIMITADA.

NOVENO: Que, el recurso de apelación básicamente se ha fundado en que : 1.-) Existe inobservancia del art. 3 de la Ley 19.983 ya que habiéndose aceptado electrónicamente el documento no resulta admisible la alegación de la demandada ni prueba alguna en tal sentido, por cuanto la factura N° 11 ha quedado irrevocablemente aceptada en los términos del art. 3 de la Ley 19.983; 2.-) Porque se incurre en infracción grave de las normas reguladoras de la prueba ya



que se prescinde de la presunción de derecho contenida en el artículo 3 de la Ley 19.983, respecto de la acepción expresa de una factura; se otorga o asigna valor probatorio a diversos instrumentos privados emanados de terceros que carecen de toda posibilidad legal de tenerlos por aceptados ya que no están suscritos por ninguna parte y se da por establecida y acreditada una relación contractual a suma alzada entre las partes del presente juicio sin ninguna prueba; 3.-) Finalmente se sostiene que las alegaciones formuladas por la parte demandada no se subsumen en los supuestos fácticos de la excepción opuesta , y por lo tanto, debió haber sido rechazada por ese motivo.

DECIMO: Que, el procedimiento para el cobro ejecutivo de una factura contempla, dos fases: se inicia por medio de la gestión preparatoria de notificación de cobro de factura y, una vez afinada, la sigue el procedimiento ejecutivo, según las reglas generales establecidas en el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil.

UNDECIMO :Que, tal como resolvió la Excma. Corte Suprema por sentencia de 26.12.2011, Rol N° 7.005-2010) el alcance de la causal de impugnación en la fase de gestión preparatoria de notificación de cobro de factura que "recordando el Mensaje del Poder Ejecutivo que dio origen al texto legal en alusión y, teniendo en cuenta los alcances que en las demás hipótesis de preparación de la vía ejecutiva previstas en la ley procesal tiene la oposición del deudor requerido, se ha dejado en claro que, en la gestión previa se verificará la concurrencia de los presupuestos del artículo 5° de la Ley N° 19.983, con lo cual se obtiene resolución favorable, permitiendo que se continúe con el procedimiento y se interponga demanda ejecutiva, ante la cual, el juez de la causa debe efectuar un nuevo análisis en el que no se ve atado por el efecto de cosa juzgada de lo ya decidido en los autos, puesto que la determinación adoptada en la gestión no ha tenido la virtud de generarla. De esa forma, entonces, requerido el ejecutado, conforme a las reglas generales, tendrá la facultad de oponer las excepciones que estime justificadas, pudiendo sustentarlas en iguales antecedentes de



hecho que aquellos expresados en la impugnación formulada en la fase preparatoria, siendo posible que acompañe mayores elementos encaminados a obtener un pronunciamiento favorable del sentenciador; aunque siempre teniendo presente que el ejecutante cuenta con unan presunción de legitimidad de su crédito, por lo que la carga de la prueba le corresponderá a la parte ejecutada".

En esta misma lógica se ha resuelto que es "improcedente y contrario a derecho que los jueces de segundo grado rechazaran la excepciones por el sólo hecho de no haber alegado el ejecutado en la gestión preparatoria, en el mismo acto o dentro de tercero día de notificado, la falsificación material de la factura ni porque tampoco haya reclamado de la falta de entrega de la mercadería en la forma establecida en la Ley N° 19.983" (Corte Suprema 08 de enero de 2013 (Rol N° 3111-2011).

DUODECIMO: Que, la recurrente sostiene que la factura N° 11 fue recepcionada por la demandada el día 11 de julio de 2018, a las 13.11:37 horas, y fue aceptada expresa y voluntariamente (conforme al acuse de recibo) conforme de la misma se realizó el mismo día a las 16:39:41, razón por la cual no habiéndose formulado reclamación alguna en forma electrónica y legal el título ha sido irrevocablemente aceptado, y la demandada se encuentra legalmente impedida de reclamar respecto de su contenido, la falta total o parcial de entrega de mercaderías, conforme al art. 3 de la ley 19.983.

DECIMO TERCERO: Que, la recurrida sostiene que no opera la presunción ya que se está ante una factura ideológicamente falsa que fue emitida después de terminado un contrato uy que incluso antes de que por error un funcionario efectuase un acuse de recibo se solicitó su anulación. Indica demás que con fecha 31 de agosto de 2018 su representada a través del formulario 2117 efectuó una petición



administrativa al Servicio de Impuestos Internos de anulación de la factura electrónica por ser una operación no fidedigna.

DECIMO CUARTO: Que, la sentencia recurrida en el considerando decimos quinto y sexto reconoce la existencia de un error en la aceptación formal de la factura. Indicando además que se encuentra acreditado que la vinculación contractual entre las partes se encontraba terminada a la fecha de emisión de la factura, por tratarse de modalidad de suma alzada y debidamente extinguidas las obligaciones mediante el pago, de manera tal que tal documento de orden tributario que ejecutivamente se cobra en autos, no da cuenta de una obligación que deba ser pagada por la ejecutada, configurándose en consecuencia la excepción a la ejecución opuesta por la ejecutada, la que en consecuencia es acogida.

DECIMO QUINTO: Que, para que se configure la presunción que emana del artículo 3 de la Ley N° 19.983 deben darse por cumplidos los supuestos facticos que la configuran, y es del caso que tal como la sentencia impugnada lo declarada, los mismos no concurren el presente caso, ya que no es posible dar por acreditado la aceptación válida de la factura que sirve de sustento a la cobranza, por haber existido un error en el funcionario que dio curso a la aceptación de la misma, conclusión fáctica que estos sentenciadores comparten, razón por la cual será desestimado esta primer vicio que ha sido invocado.

DECIMO SEXTO: Que, tampoco se aprecia que se haya incurrido en infracción grave de las normas reguladoras de la prueba por supuestamente prescindirse la presunción de derecho contenida en el artículo 3 de la Ley 19.983, respecto de la aceptación expresa de una factura; ya que como se indicó esa presunción no se configura en el presente caso, al no concurrir los supuestos facticos que la avalan, entre otros una aceptación válida de la misma. En cuanto a la afirmación que se otorga o asigna valor probatorio a instrumentos privados emanados de terceros que carecen de toda posibilidad legal de



tenerlos por aceptados ya que no están suscritos por ninguna parte, debe indicarse que los mismo no fueron objetados por la contraria y como tal pueden ser considerados por el tribunal en la construcción de las presunciones que le sirven de fundamento a la decisión que se adopta, unido a su concordancia con la prueba testimonial rendida. Finalmente en cuanto a que se da por establecida y acreditada una relación contractual a suma alzada entre las partes del presente juicio sin ninguna prueba, ello no es efectivo, la propia recurrente reconoce esa relación contractual cuando al contestar las excepciones opuestas y señalar que “su representada procedió la entrega de los 24.936 metros cúbicos de tierra vegetal que fueron requeridos por la demandada, procediéndose a la emisión de la Factura N 11”, y a ello se debe agregar la prueba documental y testimonial valorada en los considerandos decimocuarto y decimoquinto. Todo ella avala la conclusión del sentenciador.

DECIMO SEPTIMO: Que, finalmente en cuanto a la alegación que lo sostenido por la parte demandada no se subsumen en los supuestos fácticos de la excepción opuesta, y que, por lo tanto, esta debió haber sido rechazada, debemos señalar que ello no es efectivo, ya que la conclusión del sentenciador es que la factura que se cobra en autos, no da cuenta de una obligación que deba ser pagada por la ejecutada, ya que esa obligación es nula por no concurrir los supuestos de la misma.

Y visto además lo dispuesto artículos 170, 186, 187, 464, 768 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

a.- Que se rechaza, con costas, el recurso de casación en la forma deducido por el abogado don Leopoldo Carrasco Jashes, en representación de la parte demandante “Agrícola y Ganadera Norita Limitada, entra de la sentenciade definitiva de primera instancia de fecha 06 de diciembre de 2022 dictada por doña María Cristina De La Cruz Arriagada, Jueza Titular del Tercer Juzgado Civil de Temuco.



b.- Que se confirma, con costas, la sentencia definitiva apelada, de fecha 06 de diciembre de 2022 dictada por doña María Cristina De La Cruz Arriagada, Jueza Titular del Tercer Juzgado Civil de Temuco.

Redacción del Abogado Integrante señor Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y devuélvase.

Civil-90-2023.(fcv)



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por los Ministros (as) Maria Georgina Gutierrez A., Jose H. Marinello F. Temuco, catorce de junio de dos mil veintitrés. Se hace presente que el abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger, no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo respectivo, por encontrarse ausente.

En Temuco, a catorce de junio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

